

TEMAS ECONÓMICOS

Peligroso negacionismo laboral

El mercado laboral es la instancia en que el funcionamiento de la economía impacta el bienestar de la población. El estancamiento genera desempleo e informalidad. El deterioro de la legislación es otro factor. Autoridades que niegan esta realidad pueden perpetuar la precariedad laboral.

El deterioro de las estadísticas que describen el mercado laboral ha sido una fuente de preocupación para los especialistas. Esto, a pesar de que el fenómeno ha sido matizado, e incluso descartado, por distintas autoridades de la administración Boric. Las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) demuestran que tal deterioro no ha cedido, como tampoco la dificultad de las autoridades para aceptarlo.

En el trimestre mayo-junio-julio (MJJ), la tasa de desempleo calculada por el INE alcanzó un 8,7%, cifra casi idéntica a la del mismo trimestre del año anterior (8,8%). Por su parte, la tasa de ocupación informal volvió a aumentar en 12 meses, alcanzando el 27,6%. Sorprendentemente, frente a estos resultados, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), manifestó su tranquilidad, focalizando su análisis en la mínima caída de la tasa de desempleo e interpretando el alza de la informalidad como un fenómeno asociado a la transformación del empleo por cuenta propia.

Lamentablemente, un análisis objetivo del último boletín de empleo no resiste tan benévola interpretación. Mientras en el trimestre MJJ del 2023, el número de desempleados alcanzó los 868 mil, en la actualidad llega a los 880 mil. Por cierto, en el mismo período, el número de personas empleadas también ha aumentado, lo que explica la estabilidad en la tasa de desempleo (el coeficiente entre los desempleados y la suma de desempleados y ocupados). Sin embargo, la creación de empleo ha mostrado una dinámica compleja. En primer lugar, el trabajo de cuenta propia formal perdió casi 70 mil puestos en un año, mientras que el sector privado solo creó 114 mil empleos, una caída importante respecto de los meses anteriores. Segundo, la informalidad continúa al alza: el número de ocupados informales superó los 2,5 millones, un aumento de 5,4% en 12 meses. Este incremento fue especialmente importante entre las mujeres (6,3%). Tercero, de acuerdo con el INE, la mayor creación de empleo en 12 meses se encuentra en

la actividad "Administración pública y defensa", lo que acentúa las críticas que apuntan al preponderante rol del Estado en la demanda por trabajo, en contraposición a la deteriorada situación del empleo privado. Cuarto, los registros administrativos confirman estas tendencias: las cotizaciones reportadas por la Superintendencia de Pensiones han dado cuenta de una estable caída en los últimos meses.

Para cuantificar el retraso, la comparación con la situación prepandemia es ilustrativa. De acuerdo con un análisis del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, actualmente, el mercado laboral presenta un déficit de 232 mil empleos respecto de inicios de 2020 entre los mayores de 25 años. La tasa de participación laboral, por otra parte, alcanza hoy un 61,9%, inferior al 63,1% de la prepandemia. De hecho, es necesario retroceder ocho años para encontrar un nivel como el actual en este ámbito. En el caso de la tasa de ocupación (56,5%), el retroceso se cuantifica en 14 años.

La responsabilidad política en el deterioro

Así, toda la evidencia apunta a un complejo escenario laboral. El país requiere una reflexión seria sobre sus causas, así como anticipar las dinámicas y desarrollar una agenda para revertirlas. Esto cobra mayor importancia si se repara en que las acciones del mismo Estado pueden estar tras el deterioro. Por lo mismo, las autoridades deben evitar un optimismo infundado que pueda continuar sosteniendo errores de política con consecuencias de largo plazo.

Y es que, durante la última década, Chile ha rigidizado su mercado laboral. La reforma implementada bajo la segunda administración Bachelet dio el puntapié inicial a una agenda que ha incluido la profundización de los desincentivos a formalizar las relaciones laborales (subsidios y cambios tributarios) y un fuerte crecimiento del salario mínimo: mientras desde el 2014 a la fecha la inflación

acumulada ha sido de un 61%, el salario mínimo ha crecido un 122%. A esto se ha agregado una reducción de la jornada laboral, la explosión de las licencias médicas (donde se han detectado fraudes millonarios), un creciente número de feriados impulsados desde el Congreso y, más recientemente, algunos de los contenidos de la Ley Karin y la insistencia en avanzar a la negociación ramal.

El escenario lo cierra una institucionalidad que no contribuye a la creación de empleo. La judicialización de las disputas laborales y la intervención a veces irreflexiva de una autoridad con una ideología de izquierda son parte de la agenda. El costo para el país puede ser incluso superior al impacto de la "permisología". La reciente decisión de la Dirección del Trabajo, de sancionar y suspender el funcionamiento de una farmacia luego de que fuese atacada

por una turba, es un ejemplo de tal visión. El argumento fue la imposibilidad de resguardar la seguridad de los trabajadores. Sin embargo, frente a actos de vandalismo y delincuencia, tal responsabilidad es del Estado y no puede ser traspasada a los privados. Esto, en último término, daña la iniciativa privada y la creación de puestos de trabajo. Es un precedente grave que suma incertidumbre al mercado laboral.

Pero los errores en este ámbito no son solo responsabilidad de la izquierda. La oposición, por largo rato, ha validado y aun apoyado ideas provenientes de ese sector, sin internalizar su impacto sobre la creación de empleo o la informalidad. Tal responsabilidad compartida fomenta la negación, pues nadie quiere reconocer el error propio. Mientras este sea el equilibrio, el mercado laboral seguirá su deterioro.